

GRANADOS CHAPA

◆ Ayer se cumplieron cinco meses del crimen de la guardería ABC sin que nadie pague por la barbarie que asesinó a 49 niños. Lo mismo puede ocurrir con la matanza de 15 personas en Cajeme.

PLAZA PÚBLICA

¿Quién mató a Margarito Montes?

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Desde hace mucho tiempo Margarito Montes Parra andaba armado y con escolta. El estilo de acción agraria que practicaba —uno de esos estilos, en realidad— lo aproximaba a la violencia, dando o recibíendola. Puede presumirse que se jugaba la vida, a conciencia, todos los días. Pero quizá no calculó que al perderla, su familia entera iba a ser también asesinada.

Cerca del lugar donde nació, en el sur de Sonora, acudió el viernes a una fiesta. Al término del jolgorio los dos vehículos, poderosas camionetas todo terreno ambas, en que viajaban él mismo, su esposa, Gabriela Orozco Robles, sus hijos y nietos —de nueve, cinco y cuatro años de edad—, así como colaboradores, amigos y guardias, fueron tiroteados con metralletas. Quince personas en total perdieron la vida en la balacera. Nadie vio a los atacantes. O nadie ha querido aparecer como testigo. No lejos de allí, el año ante pasado —marzo de 2007— había sido también ultimado Jorge Adrián Montes Vega, hijo del dirigente campesino. Fue muerto en un palenque clandestino. Aunque la investigación no sirvió para saber quiénes mataron al muchacho de 26 años, se presumió que habría sido víctima de la banda de los Beltrán Leyva, aunque no se precisó si el ataque había sido coyuntural, al calor del juego y de las copas, o conectado con el negocio de esa mafia. El padre de la víctima, baleado él mismo ahora, sugirió que la agresión provino de grupos delictivos protegidos por el gobernador Eduardo Bours. No formalizó denuncia alguna, y no se alejó de esa zona, donde grupos de campesinos ya quis guardan de él mala memoria. Lo acusaron desde aquel momento de ser instrumento del presidente Carlos Salinas para quitarles su tierra. Movilizaciones recientes enfrentaron de nuevo a esos grupos con Montes Parra, que había iniciado ya negociaciones a su estilo con el gobernador panista Guillermo Padrés.

Nacido en 1953, se formó como in-

geniero y sociólogo rural en la Universidad de Chapingo, donde fue profesor. Perteneció un tiempo al Partido Comunista pero luego se movió a la izquierda y se vinculó al trotskismo. Fue parte de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Cuarta

Internacional. De esa época, fines de los setenta y principios de los ochenta, data su activismo. Era el típico agitador y organizador de la lucha social, tanto en la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente como en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Luego le ganó el realismo. Fundó en 1986 la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), y desde entonces buscó el cobijo gubernamental. Se asentó en el ejido Colorado, en Tierra Blanca, donde se estrecha la cintura nacional. Desde allí operaba recuperaciones o invasiones de tierras, así en Veracruz como en Oaxaca. Los terratenientes afectados le crearon la imagen de depredador, que actuaba con apoyo oficial, a veces de la Federación, a veces de los gobiernos estatales. Uno de sus lances principales ocurrió en enero de 1988: al frente de 4 mil campesinos sin tierra ocupó la enorme propiedad de Toribio Gallardo, un cacique al que se acusaba de haber matado a 40 personas. También contaron en el repertorio de Montes Parra haber recuperado, o invadido, tierras de familias pudientes, como los Bravo Ahuja —familia cuyo principal

miembro, el ingeniero Víctor, gobernó a Oaxaca y fue secretario de Educación Pública de Echeverría— y los Garci Crespo. Aunque en apariencia o realmente la UGOCP infringía la ley, actuaba siempre de acuerdo con los gobiernos, que entregaban a los ocupantes las tierras afectadas, y a veces pagaban a los propietarios desplazados grandes indemnizaciones o predios comprados ex profeso. Era un juego en que todos ganaban.

La UGOCP se transformó de mero grupo de presión social en una oficina de servicios con cuya prestación incrementó su militancia. Aunque en esos casos no

Continúa en siguiente hoja



Fecha 06.11.2009	Sección Primera - Opinión	Página 13
----------------------------	-------------------------------------	---------------------

hay un padrón, ni estabilidad en la pertenencia, se presume que a la organización pertenecen unas 300 mil personas en 13 estados, principalmente Oaxaca y Veracruz. En paralelo con la organización de masas aptas para las movilizaciones funciona una asociación civil de la que derivan uniones de crédito. Cuenta con una oficina principal en la calle Augusto Rodin, de la colonia Nápoles. Era responsable de ella, como director técnico, Víctor Alanís, también asesinado hace una semana.

Aunque formalmente no pertenecía a ningún partido, luego de que se marchó del PRT, a la postre fuera de la escena electoral, Montes Parra hacía política cercana al aparato priista. El año pasado celebró el séptimo congreso de la UGO-CP en Cosamaloapan, con la inevitablemente rumbosa presencia del gobernador Fidel Herrera. El sábado, al día siguiente del asesinato del dirigente, su gobierno hizo publicar una esquila donde lo llamó "gran aliado del impulso a la modernización y el desarrollo del campo veracruzano, en especial de la Cuenca del Papaloapan".

La Procuraduría de Justicia de Sonora, a cargo todavía de Abel Murrieta, designado por Bours y ratificado por Padrés, de tan pobre desempeño en el crimen de la guardería ABC –del que ayer se cumplieron 5 meses– inició la averi-

guación previa que ahora está en manos de la General de la República. No hay a cuál ir, como lo muestra el caso de los 49 niños asesinados. La muerte de los 15 de Cajeme seguirá la misma deplorable suerte. Nadie sabe nada, porque quizá se sabe mucho, paradoja que también re-

cuerda la desaparición del reportero Alfredo Jiménez.

◆ CAJÓN DE SASTRE

El continuismo difiere de la continuidad en que simplemente prolonga en el tiempo las rutinas establecidas, y por lo tanto, preserva a una institución de los cambios que, ostensiblemente en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son imprescindibles y urgentes. En un procedimiento opaco, donde las decisiones fueron tomadas por los jefes de los grupos mayoritarios sin tener que explicarlas a nadie, el Senado de la República condenó a la CNDH a padecer el continuismo, ni siquiera el soberanismo sin Soberanes sino con él mismo dentro, como en los últimos 10 años, pues no otra cosa significa la designación de su primer visitador, Raúl Plascencia, no para sustituirlo al frente de esa comisión sino para compartir el mando con él. Ya examinaremos el juego de poderes que marginó a Emilio Álvarez Icaza y humilló a Luis Raúl González Pérez.

miguelangel@granadoschapa.com